

# La economía, el referéndum y las elecciones

UN Gobierno democrático con autoridad moral es un requisito imprescindible para establecer y poner en funcionamiento un paquete de medidas económicas que serán inevitablemente impopulares, pero que se encargarán de resolver nuestros problemas económicos básicos", ha dicho la pasada semana Federico Lipperheide, vicepresidente del Banco de Vizcaya, ante la Cámara de Comercio hispano-norteamericana en Nueva York. Y para concretar aún más el contenido de ese Gobierno democrático añadió que el clima de las inversiones extranjeras en España mejorará "tan pronto los españoles den su voto y se inclinen por una solución moderada y los partidos políticos de centro dominen la situación".

El presidente Adolfo Suárez, en su mensaje televisivo del mes de septiembre, afirmó que los problemas económicos de España tenían una raíz política y que sólo atacando esa base política podrían resolverse: era un juicio que durante años habían venido defendiendo economistas de las más diversas orientaciones y que, por fin, se aceptaba desde el Gobierno. La cuestión era, y es hoy con mucha mayor actualidad, desde qué bases políticas se atacaba el problema económico. Tres meses han pasado desde las palabras del presidente en televisión: y hoy, en vísperas de un referéndum que no es sino el prólogo de unas elecciones generales deseadas por el Gobierno, esas bases políticas están mucho más claras. Las palabras del señor Lipperheide en Nueva York no son sino una muestra cualificada de por dónde van a ir los tiros, y no olvidemos la prudencia de los banqueros al pronunciarse en política.

El programa político del Gobierno —un Gobierno "belligerante" como en tantas ocasiones han repetido sus exponentes, tanto de cara al referéndum como a las elecciones— coincide básicamente con sus objetivos económicos y con los objetivos e intereses de los grupos sociales que representa. Hay crisis y las medidas aisladas no sirven para atajarla: es necesario un plan en profundidad que sin atentar a los intereses económicos de los grupos y capas sociales hasta hoy en el poder sirva para estabilizar la situación. Claro está que para llevarlo a cabo alguien tendrá que pagar la factura, y serán precisamente las clases y sectores sociales más populares, alejadas del poder, quienes la paguen. Las formas que habrá de asumir este plan están todavía en discusión, deben aún ser afinadas, pero algunas de las orientaciones del contradictorio paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno el pasado 8 de octubre podrían servir: el control de los ingresos salariales, tal vez con fórmulas más estrictas o, lo que sería más productivo para el Gobierno, con nuevos instrumentos

que las hicieran verdaderamente aplicables, sería uno de los ejes de tal política, sin duda.

El problema político sería encontrar no tanto el consenso —objetivo ilusorio, sobre todo si tenemos en cuenta que a la luz de los principios electorales y de las exclusiones que se contemplan para las elecciones, una buena parte de las voces discordantes quedarán disminuidas e incluso tajantemente fuera de las Cortes— como una cierta autoridad, especialmente de cara al exterior, que podría constituir el argumento decisivo de cara a ese nuevo plan económico. Pero no sólo de cara al exterior, sino también de cara al propio público político del Gobierno, esto es, a los empresarios españoles, recelosos hoy de la situación política.

El referéndum sería el primer paso en esta línea de actuación: ganado ya de antemano, confirmaría, y en ello los porcentajes van a ser decisivos, la fuerza operativa del Gobierno —tal vez la real sea distinta, pero a corto plazo y a menos que la oposición en bloque explicitara una postura de rechazo, esa fuerza real contaría menos que la aparente—. Daría, así se piensa en círculos oficiales, una cierta confianza al empresariado y permitiría ir afinando los propósitos de los inversores extranjeros que se concretarían tras los resultados de las elecciones: unas elecciones concebidas desde su nacimiento como destinadas a dar el triunfo a una gama política que iría desde el neofranquismo de Alianza Popular hasta el centro relativo del Partido Popular, pasando, cómo no, por las formaciones políticas patrocinadas por el propio Gobierno.

Ese sería el momento adecuado para lanzarse a la nueva política económica —parece pensar el Gobierno—; habría llegado entonces la hora de apretar el cinturón: estableciendo controles salariales muy rígidos, controlando también, tras el respiro inicial que probablemente se dará en la línea de lo que ha anunciado el gobernador del Banco de España para los últimos meses de este año, las magnitudes monetarias, contando con un relanzamiento de la inversión privada que se producirá como consecuencia del nuevo clima de confianza política y contando con el apoyo de la inversión exterior e incluso de unos apoyos crediticios exteriores, se podría ir pensando en enderezar la economía. Podría ir pensando el Gobierno, porque lo cierto es que de ese paquete quedarían fuera demasiadas componentes cuya fuerza puede hacer estallar nuevamente todo el montaje: porque ni los problemas de la balanza comercial —los de pagos podrían repararse mínimamente gracias a ese apoyo exterior del que hablamos— se resolverían, ni el paro —cuya tendencia en los próximos meses es al aumento decidido— se podría atajar.

Pero, y siempre dentro de esta

lógica, las cosas no son tan fáciles. José Ramón Lassuen afirmaba el pasado jueves en Bilbao: "La situación es tan grave que podría obligar a adelantar las elecciones anunciadas para marzo o a formar un Gobierno de coalición capaz de acometer las medidas drásticas que el momento exige, aunque un Gobierno de coalición tendría pocas posibilidades de resolver la situación". Según Lassuen, la situación española es claramente peor que la de cualquier otro país de nuestras características, incluido Italia o Gran Bretaña: tenemos las menores posibilidades de crecimiento y las mayores perspectivas de inflación, déficit exterior y aumento de paro de toda la OCDE. En esta misma línea se ha pronunciado Julio Alcaide Inchausti en Bilbao: "La economía española se enfrentará al año 1977 con mayores dificultades de partida que en 1976. Los empresarios muestran mayor incertidumbre en sus expectativas de producción y demanda. La demanda de inversión no tiende a recuperarse. Ello promueve un mayor nivel de paro, dado el crecimiento de la población activa española y de retorno de emigrantes. La inflación de precios y salarios tiende a empeorar, ante la falta de una política de austeridad y del pacto social necesario. La balanza de pagos puede recuperarse algo, pero hay gran incertidumbre. El endeudamiento exterior en sus actuales niveles es un factor negativo por su coste financiero y por el posible agotamiento del crédito español".

Son opiniones que en algunos de sus puntos son discutibles —y están siendo discutidas—, pero que reflejan inequívocamente la gravedad de la situación.

Volvamos al razonamiento del Gobierno: el triunfo en el referéndum y la victoria en las elecciones de un espectro político propicio para la defensa de los intereses económicos que han estado en el poder en los últimos cuarenta años, son, o pueden ser, a juicio del equipo Suárez, condiciones propicias para lanzar un plan estricto de control de la economía. Sin embargo, la gravedad de la situación económica supera cualquier optimismo en este sentido: el razonamiento contrario al del Gobierno, un razonamiento que viene siendo expuesto desde hace ya muchos meses, cobra por tanto un valor especial.

De la crisis no se sale con soluciones tradicionales, implícitas en un modelo de crecimiento —el de 1959— que ya no sirve. El relanzamiento de la economía española no se va a realizar con los tres grandes pilares que sirvieron para dar el salto de los sesenta: inversiones extranjeras, turismo y remesas de emigrantes. Los controles salariales, sin contrapartidas políticas que en una vía genuinamente democrática permitan parcelas de poder a los representantes políticos del mundo del trabajo, no se

pueden realizar en un país con nueve millones de asalariados y con una capacidad de lucha que es ya un dato. Y en estas condiciones la confianza política que para el empresariado y los inversores extranjeros podría proporcionar un resultado positivo en el referéndum y las elecciones podría venirse abajo.

Las crisis económicas —y crisis como la actual no son habituales— no son propicias a actitudes de cambiar la fachada para mantener los mismos privilegios: la historia está llena de casos en los que las crisis económicas han parido cambios bruscos del esquema político. Todos, desde el Gobierno hasta la oposición, aunque con intenciones distintas, quieren evitar una situación de estas características para España. Y en este empeño la responsabilidad del Gobierno es tan importante como la de la oposición: las dos partes han de ser tenidas en cuenta a la hora de encontrar las soluciones.

Porque, ¿de qué valdría lanzar una política de austeridad destinada a controlar efectivamente los salarios, si la reacción de los trabajadores cortocircuitara la marcha de la economía? ¿Dónde quedaría la tranquilidad que tanto buscan los empresarios? Y siguiendo esta línea de interrogantes, ¿cómo se podría mantener una política antiinflacionista y al tiempo de apoyo a la inversión si una política monetaria expansiva alentaría esa expansión y si la inversión pública no puede cumplir un papel determinante, habida cuenta de la exigüidad de los medios del Tesoro? Y para rematar este análisis, esquemático en extremo, habría que ver la reacción de los inversores extranjeros ante el panorama. Todo ello sin olvidar que los problemas del comercio de España con el exterior seguirían, en su enorme gravedad, inalterados.

Con ser la dinámica política la que hoy atrae la atención del país, detrás de ella hay intenciones económicas. Pero en medio de la crisis más seria que España conoce desde los años cuarenta, atajar los problemas de la economía con soluciones políticas y económicas que sólo pretenden —que muy probablemente no lo consigan— beneficiar a una minoría, nada se va a lograr sino aumentar hasta extremos imprevisibles la tensión a todos los niveles. Llamamientos a la cordura se vienen haciendo desde hace mucho tiempo: esperemos que no caigan una vez más en saco roto. El referéndum y las elecciones pueden hacer creer en la ilusión de que se tiene la fuerza política para dirigir la economía con esas orientaciones concretas que antes señalábamos, pero los problemas no se van a resolver así. Y tras espejismos iniciales, que a lo mejor ni siquiera se producen, esos problemas saltarán con mucha fuerza (y no es un recurso literario). Todavía se está a tiempo. ■ C. ELORDI